

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

La izquierda latinoamericana [The Latin American Left]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Vilas, Carlos M.
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-07-05 14:58:52
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/219333

La izquierda latinoamericana. Búsquedas y desafíos

Carlos M. Vilas

Las transformaciones recientes en la estructura social, en las relaciones de poder y en los escenarios internacionales, generan desafíos que los actores de la izquierda latinoamericana enfrentan con desigual éxito. Se identifican tres tipos principales de respuesta a esos desafíos: la evasión hacia el ideologismo, la moderación de las propuestas para no antagonizar al bloque de poder, el diseño creativo de alternativas viables de cambio a partir de lo que existe. En esta perspectiva propiamente política, se señalan las tensiones que surgen entre la activación social y el desinterés creciente por la política en segmentos amplios de las clases medias y populares; entre la dimensión representativa y la dimensión participativa de la democracia, y la necesidad de articulación de la política institucional a la movilización popular.

Carlos M. Vilas: sociólogo argentino, profesor de la Escuela Nacional de Gobierno, Instituto Nacional de Administración Pública - INAP, Buenos Aires; investigador titular en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM, México.

Palabras clave: izquierda, centroizquierda, democracia, América Latina.

Democracia social, cambios socioeconómicos profundos orientados hacia las clases trabajadoras y autodeterminación nacional constituyeron hasta recientemente el núcleo de las propuestas «de izquierda» en América Latina. Este marco admitió múltiples variaciones –por ejemplo, qué peso acordar a los ingredientes de representación y de participación, o entre las dimensiones político-institucionales y

socioeconómicas; a la articulación de regulación o planeación estatal por un lado, y relaciones de mercado por el otro. Estas variantes obedecieron tanto a la configuración histórica y estructural de las respectivas sociedades, al momento del desarrollo de las clases populares, como a específicas coyunturas políticas domésticas e internacionales.

Uno

La izquierda latinoamericana reclutó sus bases sociales, sus cuadros y sus dirigentes, de un amplio espectro: asalariados del campo y la ciudad, campesinado pobre y medio, pequeña burguesía rural y urbana, actores de reclutamiento generacional o ideológico (movimiento estudiantil por ejemplo). Fue una izquierda *popular* más que estrictamente *proletaria*, apoyada por y orientada hacia un amplio arco de actores unificados por el común denominador de la *opresión* –social, nacional, cultural– y no solo por la *explotación* de clase. En consecuencia la «frontera» que separó a la izquierda del resto del espectro político fue difusa y de carácter político-ideológico más que social.

Hasta el triunfo de la revolución cubana la izquierda latinoamericana adoptó estrategias políticas electorales y parlamentarias, con suertes variadas en lo que toca a las preferencias de los votantes y a las respuestas institucionales de las elites dominantes, incluyendo la proscripción y la represión. A partir del triunfo revolucionario en Cuba, la lucha guerrillera se convirtió en un parteaguas: la adhesión o rechazo de esa estrategia delimitó entre una izquierda «revolucionaria» y otra de tipo «reformista», en un debate que muchas veces se desarrolló de manera abstracta, sin mucha vinculación con los sistemas políticos respectivos.

El colapso de la Unión Soviética tomó por sorpresa al conjunto de la izquierda –incluso a aquella que criticaba acremente a la URSS–, pero sería erróneo reducir las tensiones y desencuentros actuales a la desaparición del bloque soviético. Salvo en el caso cubano y en mucho menor medida en el del sandinismo, la gravitación del modelo soviético en América Latina fue reducida y en todo caso de carácter simbólico. La nueva configuración de los escenarios internacionales incide en las reorientaciones de la izquierda. Sin minimizar su importancia, en lo que sigue de este texto se presta atención a algunos de los ingredientes que configuran los escenarios locales. Hoy son pocos los partidos y organizaciones que aceptan el rótulo de izquierda; los más osados prefieren autodenominarse '*centroizquierda*'. La moderación en la denominación

refleja una modificación similar en términos programáticos¹. La tríada de definiciones mencionada más arriba también ha pasado por el filtro de la moderación. Muy pocos insisten en la necesidad de lo que antes se denominaban «cambios estructurales», y los nuevos escenarios de la economía internacional son interpretados diluyendo el sentido y la viabilidad de una autodeterminación nacional.

Dos

La reorientación de la izquierda latinoamericana obedece a múltiples factores. Ante todo, estamos en presencia de escenarios que son al mismo tiempo de desestructuración y de estructuración de clases sociales: desestructuración de las clases trabajadoras, junto con la consolidación del carácter clasista del Estado en cuanto recurso de poder de las fracciones más transnacionalizadas del capital. La desestructuración de las clases trabajadoras y de segmentos importantes de las clases medias es el producto de los cambios en el régimen de acumulación: concentración del capital, innovación técnica permanente, recomposición de la tasa de ganancia, decreciente necesidad de generación de empleo incluso en fases de reactivación del producto, flexibilización y precariedad laboral, aumento de la informalización y segmentación del mercado de trabajo. Las políticas estatales refuerzan las tendencias del mercado. El retroceso del movimiento sindical en términos de convocatoria, movilización y negociación institucional contrasta con el fortalecimiento de las cámaras empresariales y otras organizaciones formales e informales del capital y con su mucha mayor gravitación en la elaboración de las políticas estatales.

La desestructuración de las clases populares tiene lugar en escenarios en los que los estilos y las tradiciones clasistas carecen de solidez, lo cual potencia el impacto combinado del cambio técnico, las transformaciones globales y las políticas estatales. La clase como referente de la política tuvo que ver más con el discurso y los enfoques de algunas organizaciones y dirigencias que con el perfil sociopolítico, las experiencias de vida y la autoidentificación de los destinatarios de esos enfoques y discursos. Salvo en Chile y Uruguay, ni los obreros votaban mayoritariamente por partidos socialistas o comunistas o por coaliciones de las que éstos participaran, ni esos partidos o coaliciones tenían en el voto o la afiliación proletaria sus contingentes predominantes. En lo que toca a los sectores populares, la política latinoamericana fue y en gran medida sigue siendo *política de masas más que de clases*, de relaciones tanto como de derechos.

¹En realidad pocos persisten en llamar 'programa' a sus definiciones de política; 'oferta' se adapta mejor al espíritu de los tiempos.

La desestructuración del mundo del trabajo lleva al replanteo de la articulación de lo popular fragmentado con lo obrero en retroceso. Sería erróneo sin embargo reducir la problemática de la fractura de las bases sociales de una hipótesis de izquierda a factores exclusivamente sociológicos. En la configuración de los escenarios contemporáneos inciden mucho sus historias previas. Hay en este sentido un contraste muy marcado entre la situación en Brasil por un lado, y en México y Argentina por el otro. En Brasil, una nueva generación de trabajadores industriales, asentada en un proceso muy dinámico de acumulación, desarrolló en la década del 70 un nuevo tipo de movimiento obrero con fuerte autonomía respecto del Estado y con amplias alianzas con el movimiento social. En México y Argentina el sindicalismo de herencia populista mantiene su dependencia respecto de un Estado que ha reorientado su funcionamiento hacia la promoción de la globalización financiera y la desprotección laboral; un sindicalismo, por lo tanto, con niveles decrecientes de eficacia en la defensa de los intereses de sus cada vez menos afiliados.

Las sociedades han cambiado también en otros aspectos. Hay mayor acceso a medios de comunicación, los niveles de escolaridad y educación son más altos, hay mayor movilidad geográfica incluso internacional; los conflictos políticos y político-militares del pasado reciente dejan secuelas de signo e impacto variado. Nuevos actores –por ejemplo una amplia y variada red de ONGs locales, nacionales e internacionales; los medios de comunicación masiva– o viejos actores renovados –como las iglesias– penetran hasta los últimos rincones de la geografía.

El Estado consolida su cobertura territorial/poblacional al mismo tiempo que aparecen o persisten las expresiones de soberanías alternativas –«capos» del narcotráfico, grupos paramilitares, ejércitos privados– que combinan el despliegue de violencia con la práctica de relaciones clientelares y se articulan de múltiples formas con el poder coactivo del Estado.

Tres

Los aspectos comentados en la sección anterior, y otros omitidos en aras del espacio, enmarcan y explicitan el cambio en las relaciones de poder que tuvo lugar en la región a partir de mediados de la década del 80. Este cambio se aprecia en múltiples dimensiones. En lo económico, en la subordinación del conjunto de los actores a la primacía de las fracciones más concentradas y transnacionalizadas del capital. En lo social, en la creciente identificación de la pobreza con la cuestión de la inseguridad

social: el regreso a la problemática de las *clases peligrosas*. En lo ideológico, en la preeminencia institucional del pensamiento neoconservador y la marginación también institucional de las perspectivas críticas. En lo político, en la instrumentalización del Estado en función de un nuevo bloque de poder hegemonizado por las grandes corporaciones y grupos económicos mejor insertados en los escenarios de la globalización financiera.

Las búsquedas y reacomodos de la nueva izquierda en América Latina tienen lugar en estos escenarios donde se conjugan la fragmentación y mayor heterogeneidad de sus bases sociales, el fortalecimiento de las posiciones de poder de los segmentos más concentrados y globalizados del capital, y la reorientación del funcionamiento del Estado. No debería extrañar entonces que muchos estén desorientados o a la defensiva en lo que se refiere a qué posición adoptar frente a la configuración presente del orden socioeconómico y qué propuestas de cambio formular. Por lo tanto, qué *eficacia de transformación social* reconocer en la democracia.

Hasta el momento la izquierda latinoamericana ha optado mayoritariamente por alguna de tres posiciones *típicas*. La primera consiste en bajar el nivel de las críticas al bloque de poder dominante como modo de reducir la tensión entre el principio mayoritario de la democracia electoral –gana el gobierno quien obtiene más votos– y el principio de gobernabilidad conservadora –goza de estabilidad el gobierno que mantiene relaciones fluidas con los factores del poder económico. Una segunda posición consiste, al contrario, en elevar el decibelaje de la crítica ideológica y producir juicios apocalípticos sobre la crisis definitiva inminente del capitalismo. Finalmente, están quienes, renunciando a la nostalgia por un tipo de capitalismo que de todos modos les fue ajeno y hostil, buscan de manera creativa una reformulación del presente orden de cosas, haciendo de la democracia el eje de la transformación social en un sentido progresivo.

El primer enfoque trata de convertir al «centroizquierda», en el mejor de los casos, en interlocutor aceptado por las elites de poder a costa de reducir el alcance y la virtualidad transformadora de las propuestas. La segunda posición convierte a la organización alguna vez política en un grupo ideológico. Si aquélla reduce la política a administración de un orden ajeno, ésta la diluye en un doctrinarismo automarginador. El tercer enfoque opta por la política y su virtualidad transformadora de la realidad.

En el fondo de estas diferentes posturas se encuentra el modo en que se caracteriza al capitalismo como régimen de acumulación en general, y del papel que

desempeña en esa caracterización general, la etapa neoliberal. Esta es una cuestión que tiene, sin dudas, una compleja dimensión teórica, pero que también posee una clara proyección para la política práctica.

En efecto: si el énfasis se pone en lo *neoliberal* del capitalismo latinoamericano, una propuesta de izquierda no tiene por qué plantearse, forzosamente, la cuestión de la existencia y posibilidad de una alternativa al capitalismo. Si de alternativa se trata, bastaría con que lo fuera al presente diseño neoliberal. Desde esta perspectiva, los problemas más notorios que plantea el esquema político y económico dominante – empobrecimiento de sectores amplios de la población, fuerte concentración de los ingresos, regresividad tributaria, extendido deterioro social, polarización creciente de la sociedad, entre otros– son básicamente *asignaturas pendientes* del modelo. Una adecuada reforma tributaria, políticas sociales mejor diseñadas, la definición de marcos regulatorios de la actividad de los grandes conglomerados capitalistas, serían algunas de las medidas necesarias y suficientes para que se completaran los deberes y los problemas se superaran.

Al contrario, si se entiende que las «malfunciones» del esquema dominante no son «deberes pendientes» sino *efectos sistémicos*, las cosas cambian. Lo neoliberal se convierte en una especificación de lo sustantivo: el capitalismo. El neoliberalismo sería entonces el modo específico en que la organización capitalista de la sociedad se expresa actualmente. Pobreza, concentración de los ingresos, impunidad del capital son otras tantas dimensiones de un esquema de acumulación que funciona con base en ellos, que los requiere y los reproduce. La explotación y la marginación sociales – salarios bajos, precarización laboral, etc.– serían desde esta óptica tan integrales a este esquema como la innovación tecnológica o la globalización financiera.

La primera perspectiva no tiene necesidad de plantearse la cuestión de una posible alternativa al capitalismo, particularmente escabrosa tras el colapso del bloque soviético y regímenes afines. En sus variantes más chirles, tampoco parece necesario plantear alternativas a la versión neoliberal presente. Bastaría con una administración más transparente para mejorar las cosas. El combate a la corrupción gubernamental sería, en definitiva, el gran deber a realizar². Al contrario, el segundo enfoque se desentiende de las múltiples variantes del capitalismo realmente existente y descalifica como cuestión de principio todo lo que no apunte a algo sistémicamente alternativo. Soslaya, por lo tanto, dos cuestiones principales: la que se refiere a la necesidad de formular esa alternativa, siquiera en sus lineamientos básicos, y la que se

²Ver por ejemplo el «Consenso de Buenos Aires» (publicado en Argentina en *Página 12*, 4/12/97, Buenos Aires), que incluso acepta como buena la regresividad tributaria.

remite a las múltiples transformaciones involucradas en la consolidación del esquema neoliberal. La crítica de lo presente carece de una dimensión política propositiva.

Esta dimensión propositiva constituye el núcleo del tercer enfoque: combinar la crítica de lo existente con la formulación de alternativas viables. La sección siguiente se plantea desde esta perspectiva de una izquierda eficaz y creativa.

Cuatro

El capitalismo realmente existente en América Latina configura por sí mismo una agenda amplia para una izquierda que aspire a ponerse al frente de la insatisfacción y las aspiraciones de sectores muy amplios de la población. Cuando entre dos quintos y tres cuartos de la población están en condiciones de pobreza, la inseguridad y la violencia enseñorean, el empleo se achica y se degrada, y los ricos se hacen más ricos no por su mayor «instinto de laboriosidad» que describía Veblen sino gracias a la apropiación del esfuerzo colectivo y la instrumentalización del Estado, es evidente que hay muchos lugares por donde entrarle a la cuestión.

Una izquierda que aspire a ganar o recuperar la voluntad política de las mayorías populares y ciudadanas, y convertirse en alternativa de poder, deberá ofrecer una propuesta eficaz y verosímil de reestructuración de la economía y, sobre todo, de ofrecer una propuesta plausible de distribución de los frutos del crecimiento – tema conspicuamente ausente en los enfoques neoliberales.

En este terreno el desafío central es cómo compatibilizar el logro de cinco objetivos básicos: *empleo, bienestar, rentabilidad, eficiencia y competitividad internacional*. La reestructuración neoliberal garantiza rentabilidad para tramos reducidos de la gran empresa y, en menor medida, competitividad internacional, al costo de elevados niveles de desempleo y degradación creciente de las condiciones de vida de segmentos muy amplios de la población; la eficiencia microeconómica es la contracara de ineficiencias macroeconómicas y macrosociales. Se trata por lo tanto de diseñar estrategias de desarrollo en las que la rentabilidad y la eficiencia microeconómica, y una positiva inserción internacional, se apoyen en niveles crecientes de seguridad y bienestar social a través de la única forma efectiva de alcanzarlos: empleo e ingresos estables y satisfactorios para todos, de acuerdo a niveles crecientes de calificaciones y de capacidades.

La consecución de estos objetivos tiene que ver con la economía pero también con la política: toda estrategia de desarrollo involucra decisiones respecto de quién

produce y qué, cómo y para quién; cómo movilizar qué recursos; a qué financiamiento recurrir, entre otras cosas. En la medida en que los sesgos y las inercias del mercado no conducen por sí solas a los objetivos enunciados, el cambio de prioridades macroeconómicas demanda el gerenciamiento orientador y regulador de un Estado democráticamente constituido y gestionado. Para esto, es ineludible la construcción de amplios consensos; no en abstracto, sino acuerdos para recorrer un camino determinado. Por lo tanto, el consenso implica asumir la inevitabilidad de cierta conflictividad, en la medida en que no todos los actores en el bloque de poder coinciden con los objetivos, ni estarán dispuestos a aportar su contribución voluntariamente. Si esta virtualidad conflictiva no se reconoce, el discurso del consenso deriva hacia la hipocresía. El tema ofrece varias facetas.

1. En primer lugar, la *tensión entre lo social y lo político*. Los magros resultados electorales, las dificultades para formular una propuesta política alternativa al neoliberalismo, la crisis del marxismo de tipo soviético, la desorientación de la socialdemocracia europea, la apatía política de mucha gente en el campo popular y en la pobreza, son algunos de los elementos que han contribuido a que segmentos de la izquierda latinoamericana se sumen a quienes proclaman la ineficacia de la política para resolver los problemas de la gente. Esta actitud de escape combina resabios del viejo basismo con influencias posmodernas, y comparte con ambas el abandono del terreno político a los adversarios. O bien conduce a que las organizaciones adopten el comportamiento de los tradicionales grupos de presión en nombre de la «sociedad civil».

Este antipoliticismo refleja la existencia de una adversa correlación política de fuerzas que se percibe como inmodificable, al menos en el futuro previsible; hay por lo tanto cierto derrotismo que contrasta con el voluntarismo del pasado –y no me parece producto del azar que el discurso de la «pospolítica» reclute muchos de sus adeptos en los «foquistas» de ayer. Pero este repudio por la política «realmente existente» también puede ser visto como la actitud inicial de lo que puede devenir en constitución de una alternativa a la política dominante, en la medida en que el repliegue hacia lo social sea encarado como una reinmersión del pez en el agua, si se me permite el uso libre de la metáfora maoísta.

Para llegar a ser alternativa política, es imprescindible contar con inserción social, y esto no es de ahora: el movimiento obrero precedió a los partidos socialistas, del mismo modo que la burguesía existió primero como actor económico y sólo después como propuesta política. En escenarios de amplia y acelerada reconfiguración social real y simbólica, la eficacia de lo político reclama el

desenvolvimiento de fluidas relaciones con los actores sociales cuyas demandas y aspiraciones, necesidades y deseos, son vehiculizadas por la política.

La dinámica de la competitividad electoral impide que esto sea planteado como una secuencia: primero lo social, después lo político. La apuesta a lo social tiene ritmos e implica tiempos más prolongados que los del calendario electoral, donde los partidos tradicionales son maestros. La apuesta al mediano o largo plazo debe producir entre tanto resultados tangibles para que la gente perciba que el camino hacia los grandes horizontes está empedrado de realizaciones visibles.

La eficacia de una propuesta política no se reduce a su capacidad para expresarse como política estatal, pero sin esta capacidad aquella eficacia resulta poco plausible. Toda matriz de poder social aspira a adquirir expresión estatal; sólo así alcanza plenitud porque solo así deviene soberana. Si no cuenta con las funciones típicas del Estado es muy difícil que un proyecto político pase de la formulación teórica o literaria a una verificación práctica y a una reformulación estable de la matriz de poder en la sociedad.

Es incuestionable que algunas experiencias de gestión estatal de la izquierda latinoamericana presentan sesgos autoritarios. De ahí que una gestión democrática del Estado demanda una democratización de la propia izquierda, tanto más cuanto que el cambio en los escenarios políticos ya no hace necesaria la clandestinidad ni el verticalismo del pasado, y al contrario, los desaconseja. La izquierda no puede pretender credibilidad para sus propuestas de cambio democrático y participativo si no empieza por ordenar su propia casa.

2. La tensión/conjugación entre objetivos de corto plazo por un lado, y objetivos de mediano y largo plazo por el otro, y entre el *tiempo corto* de las coyunturas y el *tiempo largo* de los procesos de cambio sistémico, puede ser vista también como la tensión entre la *dimensión representativa* y la *dimensión participativa* de la democracia. Insertos en la dinámica electoral por las razones y en las condiciones mencionadas más arriba, los partidos de la izquierda pueden resultar forzados a bailar un ritmo que al principio les incomoda, al mismo tiempo que plantean la necesidad de cambiar la partitura y de reformar la composición de la orquesta. Ni pueden dejar de bailar, ni pueden simplemente aceptar hacerlo según el ritmo que les toquen. Si dejan de bailar se quedan solos, en el mejor de los casos apostando a que a la larga conseguirán quién les acompañe. Si pasivamente aceptan bailar lo que la orquesta toca, pierden iniciativa, y por cierto tiempo lo harán peor que los experimentados bailarines de siempre.

La cuestión parece ser entonces cómo articular democracia representativa con democracia participativa: incorporarse al estilo dominante de hacer política, al mismo tiempo que actuar para superar sus sesgos y limitaciones y abrir paso a las propias propuestas de transformación. La experiencia recogida por las gestiones gubernamentales territoriales en diversos niveles, del Frente Amplio en Uruguay, el FSLN en Nicaragua, el PT brasileño, el FMLN en El Salvador, el PRD mexicano, es variada e ilustra sobre las dificultades y los éxitos de esta conjugación.

La articulación representación / participación es necesaria asimismo para prevenir o neutralizar las tentaciones de funcionarismo y de paternalismo a las que las organizaciones de la izquierda no son inmunes. El acceso a la gestión de recursos públicos y a la lógica de la política institucional puede derivar en que los funcionarios de la izquierda reproduzcan los estilos de comportamiento de los políticos tradicionales. La participación social, políticamente encarada –es decir, como algo más que la vía para suplir la escasa dotación de recursos u otras limitaciones operativas– contribuye a la democratización de las decisiones y refuerza en la gente el sentido de pertenencia, de autoría y de responsabilidad de los proyectos en los que se involucra.

En esto como en otras muchas cosas hay que poner el romanticismo bajo control. Los momentos de amplia y dinámica participación popular son esporádicos y están ligados a coyunturas específicas. La idea de que a la gente le encanta participar en tareas de interés o beneficio colectivo pertenece más a las fantasías de los intelectuales o a las convicciones disciplinadas de los militantes, que a las actitudes e iniciativas del común de la gente. A la larga, el trabajo comunitario, la supervisión ciudadana de los funcionarios, y similares, devienen actividades desarrolladas no tanto por la «sociedad civil» o «el pueblo» en general, sino por los segmentos más politizados o más sensibilizados de la población.

3. La tercera cuestión se refiere a la *vinculación entre política institucional y movilización social*. La inserción de la izquierda en las reglas de la política institucional no inhibe la convocatoria a la movilización social como recurso para incrementar su eficacia transformadora y modificar correlaciones de poder. La apertura de los sistemas políticos a la participación institucional de la izquierda es ante todo el resultado de la capacidad de movilización y de confrontación de las organizaciones sociales y los partidos políticos, e incluso de los procesos insurreccionales del pasado inmediato. Las democracias constitucionales modernas deben tanto a Locke y a Montesquieu como a los *levellers* y los *sansculottes*. La construcción de nuevos escenarios

institucionales democráticos no tiene por qué involucrar la desmovilización popular, cuando de hecho la supone.

La clase dominante tiene esto mucho más claro que la izquierda. El apoyo a los partidos que la representan en la arena electoral no le impide movilizar un amplio espectro de actores y recursos en función del logro de sus propios objetivos: cámaras empresariales, centros de educación superior, medios de comunicación masiva, presiones a los centros de poder institucional, etc. La vigencia del principio democrático «una persona, un voto» no inhibe a los grupos dominantes del despliegue de recursos de poder adicionales al sufragio. Solamente aceptando la versión que el poder otorga de sí mismo puede la izquierda reducir su movilización institucional al calendario electoral.

La articulación entre una y otra dimensión de la política popular ha suscitado no pocas tensiones, que se expresan por ejemplo en las relaciones complejas entre partidos políticos y movimientos sociales. Frecuentemente los partidos tratan de conducir el activismo de los movimientos y de subordinarlos a sus propios ritmos y estrategias; como contracara, muchos movimientos sociales ven en los partidos amenazas a su autonomía y persistencias de autoritarismo. Sin embargo los momentos más exitosos de la política de izquierda, institucional o insurreccional, desde el gobierno o desde la sociedad, están ligados a la conjugación de las organizaciones políticas y sociales en función de una estrategia compartida de activación y organización popular.

Cinco

En agudo contraste con el pasado reciente, cuando los procesos electorales eran frecuentemente interrumpidos por golpes de Estado o bastardeados por variadas formas de fraude para prevenir la promoción institucional de las demandas populares, la democracia representativa no parece hoy estar en conflicto con la exclusión social. Sistemas electorales relativamente transparentes, y ya no más las dictaduras militares, constituyen el marco institucional de la dominación del capital en casi toda América Latina. Por primera vez desde la década de 1920 las clases capitalistas han resultado victoriosas en el rechazo de toda forma de regulación estatal, manteniendo al mismo tiempo el funcionamiento de las instituciones de la democracia representativa. Una verdadera revolución burguesa.

Esta victoria *política* de las clases capitalistas en clave neoliberal ha sido interpretada por el marxismo fundamentalista con un tono celebratorio de la exactitud del análisis

del maestro. Marx tenía razón, el capitalismo despliega una dinámica de vocación universal; el derrumbe del bloque soviético y esto que ahora se llama globalización implican en realidad la universalización plena del capitalismo: todo el globo le pertenece, ya nadie se queda al margen³. Algo así como festejar las muertes por sida porque prueban que los médicos tenían razón: este virus mata.

Desde un enfoque diferente, la presente revolución burguesa es interpretada como la prueba irrefutable de la inexistencia de una alternativa sistémica al capitalismo. Insistir en la búsqueda de alternativas es seguir viviendo en el pasado, desperdiciar esfuerzos, bajarse del «tren de la historia», volver a destapar la caja de Pandora. El desafío consiste en extraer del orden de cosas presente el máximo beneficio posible para los hoy marginados, pero sin poner en peligro las correlaciones fundamentales de fuerza: *no hagamos olas*.

Desde lo que caracterizamos como *izquierda creativa*, la cuestión central consiste en dinamizar las posibilidades de la democracia para introducir modificaciones en el diseño socioeconómico y político actual que hagan posible una apropiación más justa de los frutos del esfuerzo colectivo, respetuosa del medio ambiente y de la pluralidad social. Entre la tentación administrativista de unos y el ideologismo de otros, se abre el desafío para una izquierda que apueste a la eficacia política a partir de una propuesta de transformación.

³Ellen Meiksins Wood: «Back to Marx» en *Monthly Review* vol. 49 N° 2, 6/1997, pp. 1-9. La posición de la autora implica asimismo una interpretación del horizonte al que conducirían las reformas económicas en China.